



Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE

Distraídos como hemos estado con el tema de la prisión preventiva a la “cuñada-hija” del presidente Castillo y la denuncia del “ciudadano Castillo” al equipo especial de la Policía Nacional del Perú –que por orden judicial “allanó” Palacio–, recibimos la noticia de los cambios en la cúpula de la institución policial del Perú. En ese contexto, sería grave que estos cambios tuvieran relación con el avance en las investigaciones al círculo cercano del primer mandatario. Por ello, nos sumamos a la protesta ante estos sorpresivos cambios, ya que serían una flagrante vulneración a la institucionalidad con un fillo a intervencionismos dirigidos.

Todo esto en un entorno donde ya le resulta difícil al ciudadano común distinguir entre noticias políticas y policiales. A nivel político, la crisis es tal que –como sugieren los analistas–, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo parecen tener como único punto de

agenda el mantenerse en pie y sobrevivir. Sumado a esto, los continuos cambios de ministros que afectan la eficiencia en la gestión del Estado –que ya suman 68 cambios en un año–, no hacen sino recordarnos la falta de rumbo de este gobierno.

Es así que, ante la inminencia de una crisis agropecuaria, nos dijeron que los fertilizantes para nuestra agricultura familiar llegarían a inicios de agosto; ahora que realmente estamos cada vez más cerca de dicha crisis, hemos de creer que por fin tendremos urea y otros compuestos para nuestros campos a fines de septiembre. Insistimos en este tema por motivos muy concretos y un organismo como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) nos da la razón: hace unos días, alertó en un breve pero contundente comunicado que “el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Suramérica”. En breve, advertía que la cantidad de peruanos expuestos a inseguridad alimentaria se ha duplicado de 8 millones a 16.6 millones tan solo en el lapso de la pandemia.

Recordemos otros datos claves: según un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), más de un millón de personas, es decir un 46,7% de los pequeños y medianos productores agrícolas, emplea fertilizantes químicos. Nuestra costa –en esencia una franja natural desértica– requiere más fertilizantes que la sierra y, además de



> EDITORIAL

SIEMBRA CLIENTELISMO E INEFICIENCIA, COSECHA INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA

la escasez, debido a un entorno de incremento en los costos del transporte marítimo, de la suspensión de exportaciones de fertilizantes rusos y de las sanciones comerciales contra Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania, nuestros agricultores han debido de enfrentar un incremento de precios del 77,7% entre agosto de 2021 y mayo de 2022. Esto porque 89,5% de los fertilizantes que usamos son de origen importado.



El informe del Midagri, titulado “Panorama nacional e internacional del mercado de fertilizantes inorgánicos” (julio 2022) incluye una conclusión que pudiera tomarse con pinzas: “los principales proveedores del mercado peruano han sido Rusia, China y EE. UU.; no obstante, en 2022 hubo una migración a nuevos proveedores como Indonesia, Bolivia y Argelia”. Muy bien. Un lector sensato podría interpretar que, en efecto, tendríamos opciones para cubrir la escasez de fertilizantes.

Luego de dos licitaciones fallidas, la tercera convocatoria para la adquisición de urea ya cuenta con observaciones de la Contraloría a la proveedora adjudicada como ganadora, Ready Oil Supply LLC. Por ello, hoy por hoy las miradas están puestas en la italiana Unionsped, empresa que se presenta como una alternativa aunque a precio mayor. Pero no nos sorprendería que algo nuevamente ocurra y nos prometan otra fecha de entrega. No es pesimismo,

es una dura constatación de la realidad. Cuánto agradeceríamos que nos demuestren que estamos equivocados. Miremos cómo se ha venido tratando al sector agrícola en meses recientes: recibimos el Día del Campesino con el anuncio de paros de transportistas de carga pesada, el quiebre de la anunciada tregua de los conflictos mineros en Las Bambas, con nuevos paros del SUTEP y paros agrarios que dejaron desabastecidas a las principales ciudades del país. El agro peruano es un sector protegido por el artículo 88 de nuestra Constitución (a la que algunos despistados acusan de todos nuestros males y por eso la quieren reemplazar), el cual señala a la letra que “el Estado apoya preferiblemente el desarrollo agrario”. Como vemos, en la práctica, este sector continúa expuesto a todo tipo de flagelos externos e internos.

De otro lado hay hechos inocultables. El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, advirtió que la producción de arroz y maíz cayó en junio en más de 20%. Lambayeque y La Libertad (costa) están entre las regiones productoras de arroz más afectadas. Ica y Lima (más costa) también cayeron en su producción de maíz. El asunto es tan grave que se ha decidido sembrar menos hectáreas para controlar los costos.

Es por eso que venimos advirtiendo sobre los riesgos que corre nuestra seguridad alimentaria desde hace buen tiempo. Un año atrás, en nuestro editorial del 5 de julio de 2021, recordábamos que el Perú es un país agrario, con más del 97% de este sector en manos minifundistas y familias en las cuales hombres, mujeres y niños intervienen en labores agrícolas y de pastoreo; recordábamos también que alrededor de un tercio de la población que vive en las zonas rurales se dedica al agro y –dato importante– el 50% de esa población son mujeres. Un año más tarde, no tenemos las despensas aseguradas y la provisión a futuro está puesta en duda.



UN ORGANISMO COMO LA FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA) NOS DA LA RAZÓN: HACE UNOS DÍAS, ALERTÓ EN UN BREVE PERO CONTUNDENTE COMUNICADO QUE “EL PERÚ ES EL PAÍS CON LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA MÁS ALTA DE SURAMÉRICA”.

“ Este gobierno de oídos sordos nos conduce a pensar en un Estado ineficiente y fallido por haber nombrado a personas incompetentes a cargo de la gestión gubernamental, como es el caso de las compras de fertilizantes. Es necesario volver a la elección de personas con capacidad y competencia para entregarles estos procesos. ”

La campaña agrícola del 2022-2023 precisamente arrancó en agosto y terminará en no más de 5 meses, pero sin una importación de al menos 200 mil a 300 mil toneladas de fertilizantes no se podrá atender a unos 500 mil agricultores que producen arroz, maíz, papas y otros, según información de Bloomberg. Según el propio Midagri, un 80% del consumo alimenticio en el Perú proviene de la agricultura familiar. A este respecto, se ha hablado de poner el ojo en el guano de las islas (recuérdese la República del Guano entre 1845 y 1866); es una buena iniciativa, pero insuficiente ya que es la urea el componente clave que requieren los cultivos como el arroz. El contexto no nos favorece: el dólar se ha encarecido, los combustibles se mantienen elevados, los costos logísticos por las nubes, hay recesión en Estados Unidos; en consecuencia, el precio CIF de fertilizantes (dólares por tonelada) ha alcanzado un coste de US \$611 por tonelada cuando en 2021 estuvo en US \$440, y ese ya era un aumento de 48,9% respecto al 2020, siguiendo cifras de ComexPerú.

No podemos dejar de saludar la labor que realiza Agrobanco, una entidad estatal que ha desembolsado créditos por más de S/ 359 millones entre enero y mayo de este año. El modelo de negocios basados en microfinanzas rurales ha demostrado conseguir buenos resultados, con

un índice de mora menor al 2% y una oferta de préstamos con tasas preferenciales de hasta 3.5% anual para actividades agrícolas y pecuarias. Este modelo de eficiencia podría ser copiado y, por lo que vemos de cómo se tratan los casos de éxito en el Estado, debería ser protegido.

Existen además iniciativas interesantes a las que hay que prestar atención con una actitud desprejuiciada. Una de ellas es la tan mentada “Segunda Reforma Agraria”. Es cierto que el nombre provoca escalofríos, trae malos recuerdos y no vende, pero si se revisan los ejes propuestos hay ideas que tienen mucho sentido: créditos para el agro, tecnificación, semillas mejoradas, entre otras. Es el tema del foco en la productividad lo que también llama la atención de forma positiva. Hay ideas allí que pueden apoyarse desde una óptica técnica y pragmática dejando los componentes ideológicos y políticos en segundo plano.

Hemos prestado atención: en cada uno de los “Consejos de Ministros Descentralizados” se han agitado las banderillas de esta Segunda Reforma Agraria, pero claro que con un tinte populista, demagógico y político. También somos conscientes de las críticas a este proyecto; estas críticas son claras en señalar que las medidas propuestas no atacan lo medular de la problemática, que es elevar la productividad del sector. Es allí justamente donde estamos comprometidos a ayudar y brindar apoyo a los aspectos de interés, pero hagamos el trabajo en serio.

Por ejemplo, tomemos como referente el caso exitoso de la agroindustria exportadora, que ha logrado niveles de productividad altísimos, colocándola en un lugar muy competitivo del mercado mundial y logrando dominar mercados en los que inclusive no existíamos antes con productos como los arándanos, paltas o uvas. En ese contexto, iniciativas



➤ EDITORIAL

ES POR ESO QUE NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE TRANSPARENTE SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN, Y EL PRESIDENTE DEBE SER EL EJEMPLO, ASÍ COMO UN CONGRESO QUE LEGISLE Y FISCALICE CON SOLIDEZ Y CONCIENCIA DE SU LABOR.



como el encuentro AgroFest 2022, impulsado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), son acciones positivas en el sentido de la visión de hacer del Perú “la despensa alimentaria del mundo”. Sin embargo, nada esto será posible, por ejemplo, sin contar oportunamente con fertilizantes, y si el gobierno de oídos sordos sigue sin hacer las cosas bien.

Este gobierno de oídos sordos nos conduce a pensar en un Estado ineficiente y fallido por haber nombrado a personas incompetentes a cargo de

la gestión gubernamental, como es el caso de las compras de fertilizantes. Ya hemos dicho también a lo largo de la primera mitad del año, es necesario volver a la elección de personas con capacidad y competencia para entregarles estos procesos.

Es por eso que necesitamos un gobierno que transparente su relación con la población, y el presidente debe ser el ejemplo, así como un Congreso que legisle y fiscalice con solidez y conciencia de su labor. A estas alturas del año, es una lástima que lo que le quite el sueño a nuestros líderes políticos sean el adelanto de elecciones, la vacancia presidencial, el cierre del Congreso o la Asamblea Constituyente. Ni uno ni el otro pueden arrogarse un etéreo “apoyo del pueblo”: las cifras más recientes dan cuenta que “el pueblo” desapruueba en un 87% el desempeño del Congreso y en un 63% el del Ejecutivo (IEP, agosto). Ambos poderes están en falta con sus ciudadanos, con sus electores.

Ya es hora de dejarse de oídos sordos y poner los esfuerzos donde corresponde, para recuperar confianza y predictibilidad ●



> EDITORIAL